



## Reparación del daño, tema que divide a padres de normalistas

TÉMORIS GRECKO, CIUDAD DE MÉXICO

— La mayoría de padres de los 43 se opone a recibir ese pago y en cambio defiende a abogados de embates de AMLO. PÁGS. 4 Y 5

# Reparación del daño, tema que divide a padres de los 43

**Ayotzinapa.** La mayoría se opone a recibir ese pago y defiende a los abogados de embates de AMLO, mientras que una minoría busca convencerlos de que una retribución debe ser de las principales exigencias

TÉMORIS GRECKO  
CIUDAD DE MÉXICO

Mientras la Secretaría de Gobernación sostiene que la compensación económica es necesaria para las familias de los 43 tras tantos años de dejarse empleos para buscar a sus hijos, y que aceptarla no debilitará la lucha, en el Comité de Ayotzinapa la perspectiva es otra, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de utilizar la remuneración como gancho para dividir y desmovilizar.

Además de defender a sus abogados, quienes han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los padres de los 43 normalistas considera que antes de pen-

sar en la reparación del daño se deben resolver otros pendientes, como la información que el Ejército se ha negado entregarles.

En cambio, una corriente impulsada por el empresario guerreroense Pedro Segura Valladares ha tratado de convencerlos de que recibir una retribución económica debe ser una de las principales exigencias.

Las diferencias entre el gobierno federal y el Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa han alcanzado nuevas alturas con las acusaciones que el Presidente lanza contra los abogados de las familias.

Eso aunado a la inclusión en las reuniones de la Comisión pa-

rala Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa —encabezada por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina— de un pequeño grupo de padres que tutela Segura, quien es cercano al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca —hoy preso y acusado de ordenar la desaparición de los 43— y al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, de cuya participación en los crímenes de Iguala también se sospecha.

Gobernación no toma en cuenta el papel y las conexiones de Segura en este caso. Además, insiste en que todos los familiares de los 43 normalistas —incluidos los autodenominados

“¿Cómo pueden decir que Abarca es inocente? Lo que buscan es dinero”

“excluidos” — tienen los mismos derechos, aunque quien actúa como vocero del grupo minoritario sea Felipe de la Cruz, que no es pariente de algún desaparecido, sino tío de un sobreviviente.

También insiste en que los temores de que se produzca una suplantación del sector mayoritario por el disidente son tanto infundados como técnicamente

improcedentes, porque es el primero el que ostenta la representación formal ante la comisión.

En la escuela de Ayotzinapa, sin embargo, crece la desconfianza. Primero por la defensa cerrada del Ejército que hace López Obrador, quien asegura que las fuerzas armadas han colaborado a cabalidad, así como por los señalamientos que el Ejecutivo constantemente dirige contra entidades y figuras que el Comité de Padres y Madres considera que han hecho aportaciones clave a las investigaciones.

Respecto del grupo de Segura, la posición es tajante. “No estamos de acuerdo (en acomodarse



con ellos en la comisión), porque son unos traidores”, dice a MILENIO Cristina Bautista, madre del desaparecido Benjamín Ascencio Bautista y una de cinco representantes de los familiares ante dicha instancia.

“¿Cómo pueden esos padres decir que Abarca es inocente e ir a marchar para que lo liberen, sabiendo de que él mandó a matar a los estudiantes? Lo que están buscando es la reparación del daño, o sea, el dinero, y tienen derecho, pero no nos vamos a sentar con traidores”, agrega.

#### “Nos están insultando”

En la versión de López Obrador, expuesta en 19 páginas de su último libro *¡Gracias!*, prácticamente todos los profesionales y entidades en los que ha confiado el Comité de Padres y Madres han saboteado el avance de la verdad y la justicia.

Entre estos se encuentra el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) —que se disolvió en 2023—, el anterior fiscal especializado Omar Gómez Trejo —quien renunció en 2022— y los únicos que permanecen activos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representado por el abogado Vidulfo Rosales, y el Centro Pro, dirigido por Santiago Aguirre.

En Gobernación se piensa que Rosales y Aguirre impiden que madres y padres conozcan algunos datos significativos y que influyen para que no se reúnan con personas clave ni puedan tomar decisiones por su cuenta.

Por otro lado, la dependencia parece no darle importancia a que el mismo Pedro Segura aparece en el expediente del caso, denunciado por presuntamente haber ayudado a los hermanos

Covarrubias, líderes de la banda criminal *Guerreros Unidos*, a desaparecer a los estudiantes.

Tampoco se considera relevante que Segura suele exhibir en redes sociales la influencia que tiene sobre el grupo minoritario.

En los videos que publica aparece con ellos ofreciéndoles “apoyo” aparentemente económico y explicándoles que tienen que exigir que el abogado Rosales deje de representar al comité.

“Nos está insultando”, reclama Bautista al gobierno cuando este afirma que los representantes legales controlan a madres y padres de los 43.

Agrega: “Como somos campesinos, pues el Presidente nos dijo ‘lean el informe’, ¡claro que hemos leído! Claro que al principio, hace nueve años, no sabíamos nada porque nos la pasábamos llorando. Luego tuvimos que tomar el micrófono, hablar sobre lo que leímos. No somos tontos que los abogados están manipulando, está equivocado el Presidente”.

Afirma que gracias a los abogados de Tlachinollan, del Centro Pro, de la ONG Serapaz y de Fundar Centro de Análisis e Investigación “el gobierno anterior no nos pudo engañar. No nos dieron falsos restos (de sus hijos, porque) ellos de inmediato pidieron que los analizaran los peritos argentinos, porque sabían cómo hace el gobierno.

“Sacaron las pruebas de ADN y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trajeran a los expertos (del GIEI). Ahora el Presidente está diciendo lo mismo, diferente, pero es igual, descalificándolos, a Omar Gómez Trejo, a los abogados. Yo he estado presente todos estos nueve años y cinco meses, que no me vengan a decir que los abogados enmarañaron la investigación”. ■